



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPTE. NRO: 69615/2018

AUTOS: “ARGEN PESCA S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 142/151 contra la Resolución nro. 2720 del 17.10.2017 de fs. 134/135 que no hizo lugar al recurso de revisión de la Resolución nro. 8/17/IM (DV RRMP), obrante a fs. 117/119 que desestimó la impugnación del contribuyente en razón de no haber demostrado la improcedencia de los cargos formulados originada en la IO N° 1457547 bajo las actas de inspección e infracción.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 39 bis inc. b) del Decreto Ley 1285/58, conf. Art. 26 de la ley 24.463

Que a fs. 164, el organismo de recaudación ordenó la remisión de los presentes obrados informando el incumplimiento del requisito de previo pago, en los términos del art. 15 de la ley 18.820.

Que la aquí accionante, en su escrito recursivo, plantea la imposibilidad de afrontar el ingreso y deduce la inconstitucionalidad de la exigencia del “solve et repete”.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

Que, en este sentido, si bien el Címero Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que, por otra parte, la certificación contable acompañada a fs. 152/153 resulta manifiestamente improcedente para la finalidad perseguida por la impugnante, pues el contador actuante expresa que “este trabajo profesional no constituye una auditoria ni una revisión y, por tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación”.

Fecha de firma: 10/04/2023

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#31744847#363764411#20230404145252083



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

Que, en consecuencia, en tanto en el sub examine no se han objetivado los supuestos que autorizarían eximir al recurrente del depósito previo exigido por los art. 15 de la ley 18.820 y 39 bis del decreto ley 1285/58 sustituido por el art. 26 de la ley 24.463, como requisito para la admisibilidad del recurso deducido, corresponde declarar la inadmisibilidad formal del remedio procesal intentado en virtud de no haberse cumplido lo dispuesto por la normativa legal citada.

Que, por lo demás, el beneficio de litigar sin gastos articulado el 18.12.2018 a fs. 168, contra la providencia de fs. 167 por el que este tribunal intimó a la recurrente al pago de tasa de justicia, debe ser rechazado en estricta aplicación del principio de celeridad y economía procesal, toda vez su eventual concesión no tendría alcance retroactivo y carecería de los efectos que se pretenden con su otorgamiento.

Que ello así en el marco de la conocida doctrina sentada por esta sala in re “Ascensores Ibel S.R.L. c/AFIP –DGI s/Impug. de deuda”, sent. inter. Nro. 84550 del 7.10.04 y “Orlando Laberto S. c/AFIP-DGI s/Impug. de deuda”, sent. defin. Nro. 113135 del 16.05.06, entre otros, conforme al cual, el beneficio no puede prosperar en cuanto a la eximición del pago de la tasa de justicia “toda vez que habiéndose formulado el pedido con posterioridad al recurso de apelación motivo de autos, y en atención a que dicho tributo se genera y es exigible a partir del momento en que se requiere la prestación del servicio de justicia (art. 9 inc. a) de la ley 23.898), en virtud del principio de preclusión procesal el otorgamiento del mentado beneficio no tiene efectos retroactivos y, en consecuencia, no exime de los gastos devengados con anterioridad a dicha solicitud”.

Por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE**: 1) **Declarar formalmente inadmisibile** el recurso interpuesto a fs. 142/151; 2) rechazar la presentación de fs. 168; y 3) Sin costas en la Alzada.

Cópiese, protocolícese, notifíquese, oportunamente cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/2013 (p. 4 y concord.) y devuélvase.

Se deja constancia que la Vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

